



Asamblea General

Distr. general
15 de diciembre de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 92º período de sesiones, del 15 al 19 de noviembre de 2021

Opinión núm. 60/2021, relativa a Amal Nakhleh (Israel)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 29 de julio de 2021 al Gobierno de Israel una comunicación relativa a Amal Nakhleh. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

¹ [A/HRC/36/38](#).



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Amal Nakhleh, nacido en 2004, es un niño palestino que cursa el último año de educación secundaria. Es titular de un documento de identidad expedido por las autoridades palestinas y suele residir en Ramala, la ciudad ocupada de la Ribera Occidental.

a) Contexto

5. Según la fuente, los niños palestinos de la Ribera Occidental ocupada, al igual que los adultos, se enfrentan a la detención, el enjuiciamiento penal y el encarcelamiento en virtud de un sistema de detención militar israelí que supuestamente les niega los derechos básicos. La fuente añade que el derecho militar se aplica a los palestinos en la Ribera Occidental desde 1967, cuando Israel ocupó el territorio tras la Guerra de los Seis Días.

6. La fuente señala que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se aplican al Territorio Palestino Ocupado, limitan la jurisdicción de los tribunales militares israelíes y garantizan las salvaguardias básicas para un juicio justo. La fuente añade que, a pesar de que Israel ha ratificado muchos de los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y, por tanto, se ha obligado a actuar de conformidad con ellos, las autoridades israelíes ignoran e incumplen sistemáticamente el derecho internacional. Si bien juzgar a civiles en tribunales militares debería ser excepcional, Israel es supuestamente el único país del mundo que juzga automática y sistemáticamente a niños palestinos en un sistema de tribunales militares que carece de los derechos y las protecciones fundamentales para un juicio justo. Desde el año 2000 se calcula que las fuerzas israelíes han detenido a unos 13.000 niños palestinos de la Ribera Occidental ocupada y los han recluso en el sistema de detención militar israelí, e Israel juzga aproximadamente entre 500 y 700 niños palestinos en tribunales militares cada año.

7. Según la fuente, en octubre de 2015 Israel recuperó la práctica de la detención administrativa de niños palestinos en la Ribera Occidental por primera vez en cuatro años. Desde entonces se ha informado de que 36 menores palestinos, todos ellos varones, han sido detenidos en virtud de órdenes de detención administrativa. La fuente señala que, conforme al derecho internacional humanitario, en situaciones de conflicto armado internacional, la detención administrativa se permite en circunstancias limitadas estrictamente y solo en los casos más excepcionales por “razones imperiosas de seguridad”, cuando no hay otra opción². También señala que la detención administrativa nunca debería utilizarse como alternativa a la presentación de cargos, con el único propósito de interrogar o como elemento disuasorio general para futuras actividades³.

8. La fuente hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, que Israel ratificó en 1991, y destaca que el artículo 37 de la Convención establece que los niños solo pueden ser privados de libertad como último recurso; no deben ser detenidos ilegal o arbitrariamente, y no deben ser sometidos a tortura ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, según se afirma, los malos tratos de niños privados de libertad son generalizados, sistemáticos y están institucionalizados, e incluyen alguna forma de violencia física tras la detención, así como agresiones verbales, humillaciones o intimidaciones. La fuente añade que las fuerzas israelíes detenían a menudo a los niños en sus casas en mitad de la noche; que la mayoría de los niños fueron detenidos sin notificar a sus padres el motivo de la detención; que en la mayoría de los casos no había ningún progenitor presente durante el interrogatorio, y que la policía israelí no les informó debidamente de sus derechos. La fuente también señala que el derecho militar israelí no contempla el derecho a un asesor jurídico durante el interrogatorio, y que aunque a algunos

² Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra), art. 78;

³ La fuente remite a la opinión núm. 24/2016 y a los documentos [CCPR/C/ISR/CO/3](#), párr. 7; [CAT/C/ISR/CO/4](#), párr. 17, y [CAT/C/ISR/CO/5](#), párr. 22.

niños se les ha permitido hablar brevemente con un abogado antes del interrogatorio por teléfono, esto no es suficiente. La fuente alega además que los interrogadores utilizan la violencia física, el abuso de poder, las amenazas y el aislamiento para forzar a algunos niños a confesar.

b) Detención y privación de libertad

9. La fuente informa de que el 21 de enero de 2021, en torno a las 3.30 horas, el Sr. Nakhleh fue detenido en su domicilio por las fuerzas militares israelíes. Aunque no se facilitó ningún motivo en el momento de su detención, el Sr. Nakhleh había sido acusado anteriormente de lanzar piedras, un acto que constituye un “delito contra la seguridad” según el derecho militar israelí⁴. Este negó las acusaciones. Los fiscales militares israelíes han declarado que tienen un expediente secreto sobre el Sr. Nakhleh que justifica su detención administrativa.

10. Tras la detención, la privación de libertad del Sr. Nakhleh fue prorrogada rápidamente 72 horas por un juez militar israelí del tribunal militar de Ofer del Estado parte, y el 25 de enero de 2021 se dictó contra él una orden de detención administrativa de seis meses de duración, que fue aceptada por las autoridades militares israelíes. La duración de la orden fue reducida en dos meses por el Tribunal Militar de Apelación israelí en marzo de 2021. Se esperaba que el Sr. Nakhleh fuera liberado el 20 de mayo de 2021. Sin embargo, ese mismo día un juez del tribunal militar israelí prorrogó la detención administrativa del Sr. Nakhleh cuatro meses más, con lo que tenía que terminar el 19 de septiembre de 2021.

11. Desde su detención, el Sr. Nakhleh ha estado recluido en la prisión de Megiddo, situada en Israel, al norte de la Ribera Occidental ocupada.

12. La fuente informa de que las fuerzas israelíes habían detenido previamente al Sr. Nakhleh el 2 de noviembre de 2020 y lo habían acusado de lanzar piedras. El 24 de noviembre de 2020 un juez militar israelí ordenó la puesta en libertad bajo fianza del Sr. Nakhleh. El 10 de diciembre de 2020 el Tribunal Militar de Apelación israelí rechazó el recurso de la fiscalía militar israelí, y el Sr. Nakhleh fue puesto en libertad. En ese momento, los fiscales militares israelíes dijeron que si el Sr. Nakhleh era liberado, tenían un expediente secreto sobre él que justificaría una orden de detención administrativa contra él. Como ya se ha señalado, posteriormente fue detenido por las autoridades militares israelíes el 21 de enero de 2021, 42 días después de liberación, y se dictó contra él una orden de detención administrativa basada en la Orden Militar israelí núm. 1651, que permite la detención administrativa por un período de hasta 6 meses, con posibilidad de renovaciones indefinidas⁵.

13. La fuente señala que ni el Sr. Nakhleh ni su abogado han tenido acceso a ninguna prueba contra él. La detención del Sr. Nakhleh se basa, pues, en información secreta.

14. En cuanto a los recursos internos, al parecer el Sr. Nakhleh recurrió la orden de detención administrativa dictada contra él en el tribunal militar israelí. Como se ha señalado antes, la orden de detención administrativa inicial, de seis meses, se redujo dos meses, pero el Sr. Nakhleh sigue detenido bajo custodia israelí. Dada la falta de acceso a un tribunal

⁴ A este respecto, la fuente señala que los niños palestinos son acusados predominantemente de lanzar piedras por el sistema de tribunales militares de Israel. En virtud del derecho militar israelí, la principal orden militar pertinente para la detención y privación de libertad de niños palestinos es la Orden Militar núm. 1651, relativa a las disposiciones de seguridad. La Orden Militar núm. 1651 aborda cuestiones diversas, incluida la autoridad para detener y encarcelar a palestinos por los denominados “delitos contra la seguridad” como, por ejemplo, delitos con resultado de muerte, agresiones, daños corporales o materiales, secuestros, o lesiones a soldados. El lanzamiento de piedras se incluye como un delito específico de conformidad con el capítulo G, sección 212, de la Orden Militar núm. 1651. Así, lanzar un objeto como, por ejemplo, una piedra, contra una persona o una propiedad con la intención de dañarla se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión, y lanzarlo contra un vehículo en movimiento con la intención de causar daños al vehículo o a la persona que viaja en él se castiga con una pena máxima de 20 años de prisión.

⁵ La fuente remite a la Orden Militar núm. 1651, art. 273(A) (modificada por la Orden Militar núm. 1571).

independiente e imparcial, ni el Sr. Nakhleh ni su asesor jurídico han tomado medidas adicionales a nivel nacional.

c) Estado de salud

15. Según la fuente, el Sr. Nakhleh padece miastenia grave, una enfermedad neuromuscular autoinmunitaria crónica e infrecuente que provoca debilidad, incluso en los músculos que se utilizan para respirar y tragar. Su enfermedad requiere un tratamiento médico continuo y debe medicarse de forma periódica e ininterrumpida.

16. La fuente subraya el riesgo para la salud y el contexto específico de la detención del Sr. Nakhleh. También señala que, debido a su condición de menor, la detención continuada del Sr. Nakhleh por el Gobierno de Israel constituye una grave amenaza para su salud, en particular para su integridad física y psicológica.

d) Análisis de las vulneraciones cometidas

17. Por las razones expuestas, la fuente sostiene que la detención y reclusión del Sr. Nakhleh violan las garantías fundamentales consagradas en el derecho internacional, y se enmarcan en las categorías III y V de las categorías aplicables al examen de los casos por el Grupo de Trabajo.

i. Categoría III

18. La fuente afirma que, al privar al Sr. Nakhleh de su libertad, las autoridades israelíes han violado las garantías procesales básicas y fundamentales y las protecciones relativas al derecho a un juicio imparcial, lo que equivale a una detención arbitraria.

Detenido sin orden de detención y sin ser informado del motivo de la detención

19. Según la fuente, los menores privados de libertad tienen derecho a ser informados del motivo de su detención. Los artículos 9, párrafo 2, y 14, párrafo 3 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 40, párrafo 2 b) ii) de la Convención sobre los Derechos del Niño garantizan expresamente que se debe informar a los niños privados de libertad de las razones de su detención y, sin demora, de los cargos que pesan contra ellos.

20. La fuente informa de que el 21 de enero de 2021, aproximadamente a las 3.30 horas, las fuerzas israelíes detuvieron al Sr. Nakhleh en su domicilio en Ramala. Ni a él ni a su familia se les mostró ni se les facilitó ninguna orden de detención ni otra decisión adoptada por una autoridad pública, y las autoridades israelíes no dieron ninguna razón para la detención cuando procedieron a ella.

21. La fuente añade que, desde su detención el 21 de enero de 2021, las autoridades israelíes no han acusado al Sr. Nakhleh de ningún delito y no le han informado, con el suficiente detalle para impugnar la detención, de su naturaleza y causa, lo que constituye una violación de su derecho a ser informado del motivo de la detención.

Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o a impugnar la legalidad de la privación de libertad continuada

22. La fuente señala que de conformidad con el artículo 9, párrafos 3 y 4 del Pacto y el artículo 40, párrafo 2 b) iii) de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños privados de libertad tienen derecho a que el asunto sea dirimido sin demora por una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia con las debidas garantías conforme a la ley, lo que protege el derecho del niño a impugnar efectivamente la legalidad de toda privación de libertad continuada.

23. La fuente subraya que, cuando se recurre a la detención administrativa en situaciones en las que no se contempla el enjuiciamiento de una acusación penal, la práctica presenta graves riesgos de constituir una privación arbitraria de la libertad. Por lo tanto, la detención

administrativa no debe durar más de lo absolutamente necesario⁶. La detención debe terminar tan pronto como una persona que presuntamente haya supuesto una amenaza real para la seguridad del Estado deje de suponer una amenaza real. Cuanto más dure la detención administrativa, mayor será la carga de la autoridad que la practica para demostrar que los motivos de la reclusión siguen siendo válidos⁷. También debe haber una revisión pronta y periódica por parte de un tribunal de justicia u otro órgano similar imparcial e independiente⁸.

24. La fuente sostiene que las autoridades militares israelíes no han presentado cargos formales contra el Sr. Nakhleh y que, en el momento de la presentación de información por parte de la fuente, él había pasado varios meses detenido sin cargos y sin haber sido juzgado. La fuente añade que el Sr. Nakhleh y su abogado no pueden impugnar eficazmente la legalidad de su detención porque las autoridades militares israelíes les han negado el acceso a la información secreta en la que se basaron los jueces del tribunal militar israelí para dictar y confirmar las dos órdenes de detención administrativa contra él que se mantienen hasta la fecha. Como se ha señalado anteriormente, la orden de detención se ha renovado recientemente.

25. Según indica la fuente, cuanto más tiempo detengan las autoridades israelíes al Sr. Nakhleh, mayor será la responsabilidad de demostrar que los motivos del internamiento siguen siendo válidos y que él sigue siendo una amenaza presente, directa e imperativa⁹. Sin embargo, a pesar de la carga que recae sobre Israel de demostrar que el Sr. Nakhleh suponía y sigue suponiendo una amenaza para justificar su detención sin cargos, las autoridades militares israelíes no han aportado suficientes pruebas detalladas que establezcan que el Sr. Nakhleh anteriormente o actualmente sigue suponiendo una amenaza real e imperativa para la seguridad del Estado.

26. La fuente también afirma que el hecho de no facilitar acceso a la información secreta detallada en la que se basa el Estado para justificar la privación de libertad impide cualquier impugnación efectiva de la legalidad de la continua detención del Sr. Nakhleh y supone una violación de su derecho a que el asunto se resuelva sin demora.

Los tribunales militares israelíes no son tribunales independientes e imparciales

27. La fuente señala que, aparte de la denegación de los derechos procesales fundamentales, es dudoso que el uso de tribunales militares para juzgar a civiles —en particular, menores— pueda satisfacer en caso alguno los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. El artículo 14, párrafo 1, del Pacto y los artículos 37, párrafo d), y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el derecho internacional humanitario, garantizan a toda persona privada de libertad tanto el derecho a impugnar su detención como el de ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño ha declarado que debe evitarse incoar procedimientos penales contra niños ante el sistema de justicia militar¹⁰.

28. Con referencia a otros casos examinados por el Grupo de Trabajo¹¹, la fuente señala que las órdenes de detención administrativa del Sr. Nakhleh han sido aprobadas por jueces militares israelíes que son oficiales del ejército israelí en servicio activo o en la reserva, y que están sujetos a la disciplina militar y dependen de sus superiores para el ascenso.

29. La fuente afirma, por lo tanto, que el incumplimiento por Israel de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo y la parcialidad documentada de su

⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 15.

⁷ La fuente remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, “Internment in armed conflict: basic rules and challenges” (Ginebra, noviembre de 2014), pág. 9; opinión núm. 24/2016, párr. 18, y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 15.

⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 15.

⁹ La fuente remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, “Internment in armed conflict: basic rules and challenges”, pág. 9; opinión núm. 24/2016, párr. 18; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 15.

¹⁰ [CRC/C/OPAC/USA/CO/1](#), párr. 30, g).

¹¹ La fuente remite a las opiniones núms. 24/2016, 58/2012 y 3/2012.

sistema de justicia militar demuestran que la detención del Sr. Nakhleh equivale a una detención arbitraria de conformidad con la categoría III.

ii. Categoría V

30. La fuente también afirma que, mientras que el código de justicia militar israelí otorga a los tribunales militares la autoridad para juzgar a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio ocupado siempre que tenga 12 años de edad o más, los colonos judíos que residen dentro de los límites de la Ribera Occidental en violación del derecho internacional están sujetos al marco jurídico civil israelí. Por consiguiente, Israel aplica dos sistemas jurídicos distintos y desiguales en el mismo territorio. Ningún niño israelí entra en contacto con el sistema de tribunales militares israelíes.

31. La fuente señala que los órganos de los tratados han expresado preocupación por las detenciones y privaciones de libertad discriminatorias de los niños palestinos. En 2012, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial instó a Israel a poner fin a su práctica de detención administrativa, señalando que era discriminatoria y constituía detención arbitraria¹². La fuente también señala que, con respecto a los exámenes recientes de Israel, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales, expresaron especial preocupación por la práctica continuada de utilizar la detención administrativa contra los palestinos sobre la base de información secreta¹³. Además, la fuente señala que el Grupo de Trabajo se ha hecho eco anteriormente de las preocupaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Comité de los Derechos del Niño con respecto a la detención generalizada de niños palestinos y la práctica de enjuiciarlos en un sistema de tribunales militares israelíes¹⁴.

32. La fuente declara que la detención del Sr. Nakhleh se ajusta a la práctica de las autoridades israelíes de utilizar la detención administrativa contra niños palestinos en razón de su identidad palestina con fines de castigo y no para evitar amenazas inminentes cuando no hay pruebas suficientes para acusarlos y enjuiciarlos en los tribunales militares israelíes.

33. La fuente sostiene, pues, que la detención del Sr. Nakhleh por las autoridades israelíes equivale a una detención arbitraria que se enmarca en la categoría V porque su privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el origen nacional, étnico y social.

Respuesta del Gobierno

34. El 29 de julio de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Asimismo, le pidió que presentara, a más tardar el 27 de septiembre de 2021, información detallada sobre la situación actual del Sr. Nakhleh y que aclarara las disposiciones jurídicas en virtud de las cuales seguía encarcelado, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno de Israel que garantizara su integridad física y mental.

35. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno a su comunicación. El Gobierno tampoco solicitó una prórroga del plazo para responder, posibilidad prevista en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

36. El Grupo de Trabajo observa con preocupación el silencio del Gobierno, que no ha aprovechado la oportunidad para responder a las alegaciones formuladas en el presente caso y en otras comunicaciones¹⁵. De hecho, el Gobierno no ha dado una respuesta sustantiva a

¹² CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 27.

¹³ CCPR/C/ISR/CO/4, párr. 10, y CAT/C/ISR/CO/5, párr. 22.

¹⁴ La fuente remite a la opinión núm. 24/2016, párrs. 23 y 24.

¹⁵ Opiniones núms. 8/2021, 12/2020, 84/2019, 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017, 3/2017, 24/2016, 15/2016, 13/2016, 43/2014, 58/2012, 20/2012, 3/2012, 9/2010, 5/2010, 23/2001, 31/2000, 18/2000, 17/2000, 16/2000, 4/1999, 11/1998, 10/1998, 9/1998, 8/1998, 24/1996, 18/1996, 17/1996, 16/1996, 26/1993, 18/1993, 17/1993 y 36/1992. El Gobierno presentó respuestas a las

las comunicaciones del Grupo de Trabajo desde 2007, esto es, desde hace casi 15 años¹⁶. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que colabore constructivamente con él en todos los casos de denuncias de privaciones arbitrarias de libertad.

Deliberaciones

37. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

38. Al determinar si la privación de libertad del Sr. Nakhleh fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado un caso *prima facie* de violación del derecho internacional que constituye una detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae sobre el Gobierno si desea refutar las acusaciones¹⁷. En el presente caso, el Gobierno optó por no impugnar las alegaciones, a primera vista creíbles, formuladas por la fuente.

39. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo desea abordar la presentación de la fuente relativa a la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra al presente caso. El Grupo de Trabajo recuerda que su mandato se limita a las cuestiones relativas a la detención arbitraria y que, al examinar esas cuestiones, debe hacer referencia primordial al derecho internacional de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo considera que, a la luz de las pruebas del presente caso, puede llegar a una conclusión sobre el carácter arbitrario de la privación de libertad del Sr. Nakhleh sin recurrir al derecho internacional humanitario¹⁸.

Categoría I

40. Aunque la fuente no ha alegado que la detención del Sr. Nakhleh sea arbitraria en el marco de la categoría I, el Grupo de Trabajo observa que la fuente ha afirmado que el Sr. Nakhleh, un niño de 17 años, fue detenido en su casa en plena noche del 21 de enero de 2021, y que no se le proporcionó una orden de detención ni se le comunicaron los motivos de su detención. El Gobierno tuvo la oportunidad de explicar las circunstancias que rodearon la detención y el fundamento jurídico que la justificaba, pero optó por no hacerlo.

41. El Grupo de Trabajo recuerda que la privación de libertad se considera arbitraria conforme a la categoría I si carece de fundamento jurídico. Como ya ha señalado en otros casos, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo en las circunstancias del caso mediante una orden de detención¹⁹. Es más, el derecho internacional en materia de privación de libertad incluye el derecho de la persona detenida a que se le presente una orden de detención, que es procesalmente inherente al derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la prohibición de la privación arbitraria, de conformidad con los artículos 3 y 9, respectivamente, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión²⁰. Toda forma de detención o prisión deberá ser ordenada por un juez u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia, o quedar sujeta a la fiscalización efectiva de tal juez o autoridad, de conformidad con el principio 4 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

comunicaciones del Grupo de Trabajo en relación con las opiniones núms. 26/2007, 3/2004, 24/2003 y 16/1994.

¹⁶ En relación con la opinión núm. 86/2017, el Gobierno solicitó y se le acordó una prórroga para responder a la comunicación del Grupo de Trabajo, pero no presentó una respuesta sustantiva.

¹⁷ [A/HRC/19/57](#), párr. 68.

¹⁸ El Grupo de Trabajo ha adoptado un enfoque similar en las opiniones núms. 52/2020, párr. 75, y 68/2020, párr. 59.

¹⁹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 79/2018, 35/2018, 93/2017, 75/2017, 66/2017 y 46/2017.

²⁰ Véanse las opiniones núms. 30/2018, párr. 39; 3/2018, párr. 43, y 88/2017, párr. 27.

42. En el presente caso, el Sr. Nakhleh fue detenido sin dicha orden. Además, las autoridades no explicaron las razones de su detención, incumpliendo los requisitos del artículo 9 del Pacto. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Nakhleh infringió el artículo 9, párrafos 1 y 2, del Pacto. Ello también supuso el incumplimiento del artículo 40, párrafo 2 b) ii), de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza expresamente que se informe a los niños privados de libertad de los cargos que pesan contra ellos, directamente y sin demora.

43. Además, el Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones no impugnadas de que en marzo de 2021 el Tribunal Militar de Apelación israelí redujo la orden de detención administrativa de seis meses impuesta al Sr. Nakhleh por el Tribunal Militar israelí. Por lo tanto, se esperaba que fuera liberado el 20 de mayo de 2021. Sin embargo, ese día, en lugar de ser liberado fue sometido a una nueva orden de detención administrativa por un juez del Tribunal Militar israelí. Teniendo en cuenta la falta de respuesta del Gobierno a esta alegación, el Grupo de Trabajo considera que la nueva orden, impuesta el 20 de mayo de 2021, en realidad tenía como objetivo eludir la orden reducida impuesta por el tribunal de apelación en marzo de 2021 y, por tanto, desobedecía la orden de un tribunal de instancia superior. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Nakhleh después del 20 de mayo de 2021 infringió también el artículo 9, párrafo 1, del Pacto. De hecho, sostener lo contrario significaría que los Estados podrían retener a las personas indefinidamente, con renovaciones interminables de su detención administrativa.

44. Además, el Grupo de Trabajo observa las alegaciones no impugnadas de que, desde su detención el 21 de enero de 2021, las autoridades israelíes no han acusado al Sr. Nakhleh de ningún delito y no le han informado de la naturaleza y la causa de su detención. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que se ha producido otra vulneración del artículo 9, párrafo 2, del Pacto y del artículo 40, párrafo 2 b) ii), de la Convención sobre los Derechos del Niño.

45. Por último, aunque el Sr. Nakhleh compareció ante un tribunal tras su detención y posteriormente se procedió a su detención administrativa el 25 de enero de 2021 por decisión de un tribunal militar, decisión que pudo recurrir, el Grupo de Trabajo observa que al Sr. Nakhleh nunca se le comunicaron los cargos que se le imputaban, como se ha establecido anteriormente. Esto significa que también se violó su derecho a impugnar la legalidad de su detención, previsto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, y se incumplió el artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

46. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y posterior privación de libertad del Sr. Nakhleh fueron arbitrarias y se inscriben en la categoría I, ya que carecen de fundamento jurídico.

Categoría III

47. La fuente alega, además, que el Gobierno violó el derecho del Sr. Nakhleh a un juicio justo. El Grupo de Trabajo observa que se trata de un caso de detención administrativa, que no conlleva acusación ni juicio en el sistema de justicia penal, y que normalmente no serían de aplicación las garantías de un juicio imparcial contempladas en el artículo 14 del Pacto. Sin embargo, como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, debe considerarse la naturaleza de la sanción, independientemente de su clasificación en el derecho interno, para determinar si las garantías de un juicio imparcial que figuran en el artículo 14 se aplican en cada caso:

Las acusaciones de carácter penal corresponden en principio a actos que en el derecho penal nacional se han declarado punibles. La noción puede extenderse también a actos de naturaleza delictiva porque conllevan sanciones que, independientemente de su calificación en el derecho interno, deben considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad²¹.

²¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 15. Véase también *Perterer c. Austria* (CCPR/C/81/D/1015/2001), párr. 9.2.

48. El Grupo de Trabajo ha adoptado este razonamiento en su jurisprudencia, señalando que las disposiciones del artículo 14 del Pacto sobre el derecho a un juicio imparcial son aplicables cuando las sanciones impuestas, por su objetivo, carácter o gravedad, deben considerarse penales aun cuando la detención se califique de administrativa con arreglo al derecho interno²². Sin esa investigación sobre la naturaleza de la sanción impuesta, los Estados podrían eludir efectivamente las obligaciones que les incumben en virtud del Pacto simplemente caracterizando su régimen de detención como administrativo con arreglo al derecho interno. Esto es particularmente importante en el contexto de las órdenes de detención administrativa impuestas en Israel, que parecen utilizarse como sustituto de los procedimientos penales, más que para prevenir una amenaza inminente, cuando no hay suficientes pruebas para acusar y enjuiciar a una persona²³.

49. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha considerado que, en los casos de duración excesiva de la detención, la persona debe gozar de las mismas garantías que en los casos penales, incluidas las previstas en el artículo 14 del Pacto, incluso si la detención se califica de administrativa con arreglo a la legislación nacional²⁴. En el presente caso, el Sr. Nakhleh, un niño de 17 años, ha sido condenado a seis meses de detención administrativa en prisión en condiciones similares a las impuestas a las personas que cumplen una condena penal. En consecuencia, su detención debe considerarse de carácter penal, por lo que el Grupo de Trabajo examinará si su detención cumple los requisitos del artículo 14 del Pacto y otras disposiciones pertinentes. Al hacerlo, el Grupo de Trabajo reitera que el Gobierno no impugnó ninguna de las alegaciones formuladas por la fuente.

50. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Nakhleh, un civil, tuvo que comparecer ante un tribunal militar y, de hecho, fue un tribunal militar el que le impuso la detención administrativa. El Gobierno ha optado por no responder a estas alegaciones.

51. En relación con la competencia de los tribunales militares, el Grupo de Trabajo en su práctica siempre ha sostenido que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares constituye una violación del Pacto y el derecho internacional consuetudinario y que, en virtud del derecho internacional, los tribunales militares solo pueden ser competentes para juzgar a personal militar por delitos de carácter militar²⁵. Sin olvidar que el Sr. Nakhleh solo tiene 17 años, el Grupo de Trabajo desea destacar en particular que el Comité de los Derechos del Niño ha declarado que debe evitarse incoar procedimientos penales contra niños ante el sistema de justicia militar²⁶.

52. En el presente caso, el Gobierno tuvo la oportunidad de explicar las razones para que el Sr. Nakhleh compareciera ante un tribunal militar, pero no lo hizo. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha producido una vulneración del artículo 14, párrafo 1, del Pacto y de los artículos 37 d) y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

53. Además, la fuente ha afirmado, y el Gobierno no lo impugna, que las órdenes de detención administrativa del Sr. Nakhleh han sido aprobadas por jueces militares israelíes que son oficiales del ejército israelí en servicio activo o en la reserva, y que están sujetos a la disciplina militar y dependen de sus superiores para el ascenso.

54. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 14 del Pacto exige que el tribunal sea independiente e imparcial y que lo mismo exige el artículo 40, párrafo 2 b) iii), de la Convención sobre los Derechos del Niño. A este respecto, en su jurisprudencia anterior el Grupo de Trabajo ya ha declarado que los tribunales militares de Israel que imponen este tipo de detención administrativa no cumplen este criterio²⁷. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que se han violado los derechos que asisten al Sr. Nakhleh en virtud del

²² Opiniones núms. 73/2018, 31/2017, 43/2014, 58/2012, 45/2012, 20/2012 y 3/2012. Véanse también [A/HRC/37/42](#), párr. 17, y deliberación núm. 9 ([A/HRC/22/44](#), secc. III), párrs. 68 y 69.

²³ [A/HRC/37/42](#), párr. 21.

²⁴ Opiniones núms. 49/2020, 12/2020, 73/2018 y 31/2017.

²⁵ [A/HRC/27/48](#), párrs. 67 a 70. Véanse también las opiniones núms. 66/2019, 32/2018, 28/2018, 30/2017 y 44/2016.

²⁶ [CRC/C/OPAC/USA/CO/1](#), párr. 30 g).

²⁷ Opinión núm. 24/2016, párr. 21. Véanse también las opiniones núms. 58/2012 y 3/2012.

artículo 14, párrafo 1, del Pacto y el artículo 40, párrafo 2 b) iii), de la Convención sobre los Derechos del Niño.

55. La fuente también ha alegado que la detención del Sr. Nakhleh se basó en un expediente secreto al que ni él ni su abogado tuvieron acceso. Aunque el Gobierno tuvo la oportunidad de responder a estas alegaciones, ha optado por no hacerlo. El Grupo de Trabajo recuerda que, aunque el derecho de acceso a las pruebas no es absoluto, el Gobierno tiene el deber de demostrar que había razones legítimas para restringir el acceso a las pruebas, pero ha optado por no hacerlo en el presente caso. En principio, debe facilitarse desde el inicio el acceso a las pruebas que constituyen el núcleo de la decisión de detener a una persona²⁸. Teniendo en cuenta esto y a falta de refutación por parte del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que también fueron violados los derechos que amparan al Sr. Nakhleh en virtud del artículo 14, párrafos 1 y 3 b) y e) del Pacto y el artículo 40, párrafo 2 b) iv), de la Convención sobre los Derechos del Niño.

56. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho del Sr. Nakhleh a un juicio imparcial fueron de tal gravedad que confieren a su privación de libertad un carácter arbitrario y se inscriben en la categoría III.

Categoría V

57. La fuente ha argumentado, y el Gobierno ha optado por no rebatirlo, que la detención del Sr. Nakhleh es arbitraria y se enmarca en la categoría V como detención por motivos discriminatorios. A este respecto, la fuente afirma que, si bien el código de justicia militar israelí otorga a los tribunales militares la autoridad para juzgar a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio ocupado, siempre que tenga 12 años de edad o más, los colonos judíos que residen dentro de los límites de la Ribera Occidental en violación del derecho internacional están sujetos al marco jurídico civil israelí. Por consiguiente, Israel aplica dos sistemas jurídicos distintos y desiguales en el mismo territorio. Ningún niño israelí entra en contacto con el sistema de tribunales militares israelíes.

58. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Nakhleh ha sido detenido anteriormente, el 2 de noviembre de 2020, cuando fue puesto en libertad bajo fianza. Según la fuente, y sin que el Gobierno lo haya rebatido, esto no contó con la aprobación de la fiscalía, que entonces advirtió al Sr. Nakhleh de que tenían un expediente secreto sobre él, lo que permitiría su detención administrativa. De hecho, poco más de un mes después, el Sr. Nakhleh fue detenido de nuevo. El Grupo de Trabajo considera que esto constituye una prueba clara de un patrón de comportamiento por parte de las autoridades con respecto al Sr. Nakhleh.

59. Esto coincide con una pauta señalada por el Grupo de Trabajo en su jurisprudencia, a saber, que las autoridades israelíes utilizan la detención administrativa para detener a palestinos, especialmente a varones, de manera indefinida sin cargos ni juicio²⁹. A falta de una explicación del Gobierno, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el Sr. Nakhleh, que es palestino, fue detenido con arreglo a un criterio discriminatorio, a saber, su origen nacional, étnico y social. El Grupo de Trabajo considera que también fue detenido por su género, ya que hay una clara tendencia a seleccionar a los varones jóvenes cuando se efectúan detenciones³⁰. En estas circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno ha infringido los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, así como el artículo 2, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que la privación de libertad del Sr. Nakhleh fue arbitraria con arreglo a la categoría V.

60. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, para que tome las medidas oportunas.

²⁸ Véanse las opiniones núms. 77/2020, 67/2020, 29/2020 y 78/2019.

²⁹ Opiniones núms. 12/2020, 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017 y 24/2016. Véase también [A/HRC/38/15](#), párrs. 118.159, 118.162, 118.164 y 119.4.

³⁰ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 12/2020.

Observaciones finales

61. El Grupo de Trabajo recuerda que la detención de niños en cualquier entorno debe ser siempre una medida de último recurso, lo que, como se demuestra en lo expuesto hasta ahora, no ha sido así en el caso de Israel con respecto al Sr. Nakhleh, que es un niño de 17 años. Además, el precario estado de salud del Sr. Nakhleh preocupa especialmente al Grupo de Trabajo. A este respecto, el Grupo de Trabajo se ve obligado a recordar a Israel que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con humanidad y respeto a la dignidad inherente al ser humano, de conformidad con el artículo 10 del Pacto. La denegación de asistencia médica constituye una violación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), en particular las reglas 24, 25, 27 y 30. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, para que tome las medidas correspondientes.

62. El presente caso es uno de los diversos casos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de libertad en Israel. El Grupo de Trabajo observa que muchos de los casos de detención administrativa en Israel y el Territorio Palestino Ocupado siguen una pauta ya conocida de reclusión indefinida mediante órdenes de detención administrativa consecutivas sin cargos ni juicio (a menudo basadas en pruebas secretas y con frecuencia bajo jurisdicción militar), y con recursos judiciales limitados o nulos para revisar la legalidad de la detención³¹. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras privaciones graves de libertad contrarias a las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad³².

63. Por último, el Grupo de Trabajo celebraría tener la oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno para tratar la cuestión de la privación arbitraria de libertad. El 7 de agosto de 2017 el Grupo de Trabajo envió una solicitud al Gobierno para realizar una visita al país, incluido el Territorio Palestino Ocupado, y espera recibir una respuesta afirmativa. En este contexto, el Grupo de Trabajo recuerda la invitación que el 12 de septiembre de 2014 le cursó la Misión Permanente de Observación del Estado de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para realizar una visita oficial al Territorio Palestino Ocupado.

Decisión

64. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Amal Nakhleh es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

65. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Israel que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Nakhleh sin demora y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

66. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al Sr. Nakhleh y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que representa en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que tome medidas urgentes para garantizar su inmediata puesta en libertad.

³¹ Opiniones núms. 12/2020, 73/2018, 34/2018, 86/2017, 44/2017, 31/2017, 24/2016, 43/2014, 58/2012, 20/2012, 3/2012, 9/2010, 5/2010, 26/2007, 3/2004, 23/2001, 17/2000, 16/2000, 11/1998, 10/1998, 9/1998, 8/1998, 24/1996, 18/1996, 17/1996, 16/1996, 16/1994, 18/1993, 17/1993 y 36/1992.

³² Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

67. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Nakhleh y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

68. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a: a) la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y b) el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, para que tomen las medidas oportunas.

69. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

70. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Nakhleh y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Nakhleh;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Nakhleh y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Israel con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

71. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

72. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

73. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³³.

[Aprobada el 17 de noviembre de 2021]

³³ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.